



Directo 5277/959.

Quejosa. Isabel Alvarado Sánchez.
Mtro. Ponente. Lic. José Castro E.
Srio. Adscrito. Lic. Federico Taboada A.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la ---
Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción, correspondiente al día veintiuno de octubre de --
mil novecientos sesenta.

No. Eo.

V I S T O el juicio de amparo directo núme-
ro 5277/959 promovido por la señora Elisea Valeriano
Alvarado, apoderada de la señora Isabel Alvarado Sán-
chez, contra la sentencia dictada el cinco de junio --
de mil novecientos cincuenta y nueve por la Primera --
Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de -
Puebla, que considera violatoria de los artículos 14 y
16 constitucionales; y,

R E S U L T A N D O :

PRIMERO De la copia certificada de cons-
tancias exhibida, en la que solo figuran las senten-
cias de primera y segunda instancia como documento de
estudio, se desprenden los siguientes antecedentes:

Cotejado.

El veintiuno de agosto de mil novecientos-
cincuenta y ocho ante el Juez de lo Civil del Distri-
to Judicial de Zacapoaxtla, Pue., la señora Isabel Al-
varado Sánchez demandó a la sucesión de la señora Lu-
crecia Valeriano, representada por su albacea la se-
ñora Guadalupe Barrientos de Luna, la declaración de --
que le corresponde la plena posesión del predio El --
Paredón de la Villa de Kochitlán de Romero Rubio.

Basó su demanda en los siguientes hechos:

Desde mil novecientos veintiocho contrajo-
matrimonio eclesiástico con el señor Platón Valeria-
no, así como posteriormente enlace civil. La llevó a-
vivir su esposo al predio de su propiedad. Aquél fa-
llecó en mil novecientos treinta y seis. Continuó --
la actora en posesión del referido inmueble desde el --
citado año de mil novecientos veintiocho hasta el de-
mil novecientos cincuenta y ocho. La albacea demanda-
da le promovió interdicto de recuperar la posesión --
del predio aludido, obteniendo resolución favorable --
por haber exhibido una escritura que se dice otorgó --
su finado esposo en favor de su hermana Lucrecia Va-
leriano, por el año de mil novecientos veintiocho en
la Villa de Tetela de Ocampo, en circunstancias que --
ameritaron interviniera el Ministerio Público. A pe--

sar de ello el personal del Juzgado Menor de lo Civil do Zacapoaxtla, Pue., en funciones de Juez de Primera Instancia, hace unos días la desalojó de la citada -- casa, dándole posesión de ella a la señora Guadalupe Barrientos. El sólo transcurso de los treinta años -- de posesión que ha tenido la demandante en el predio -- mencionado, la faculta a ejercitar sus derechos plenarios de posesión.

La demandada contestó oponiendo la excepción de cosa juzgada, que hizo consistir en la sentencia del veintiuno de febrero de mil novecientos cincuenta y tres, dictada en el incidente de exclusión de bienes que la misma actora promovió contra -- la intestamentaria de la señora Lucrecia Valeriano. -- Opuso también la falta de acción, ya que la actora -- al intentar el citado incidente exclusorio, alegó ser propietaria del referido bien, por haberlo adquirido por prescripción, y que el plenario de posesión no -- procedo contra el propietario del bien cuya posesión se reclama, al ser mejor la posesión del dueño que -- la de la reclamante, máxime que la sucesión demandada, el veintiséis de julio de mil novecientos cincuenta y dos, fué mantenida judicialmente en la posesión del predio.

SEGUNDO.- El cinco de diciembre de mil -- novecientos cincuenta y ocho el Juez de lo Civil de Zacapoaxtla, Pue., pronunció sentencia en la que decidió: "PRIMERO.- La actora señora Isabel Alvarado de -- Sánchez probó su acción.- SEGUNDO.- La demandada -- "señora Guadalupe Barrientos de Luna, no probó sus -- "excepciones.- TERCERO.- Se condena a la señora Guadalupe Barrientos de Luna, en su carácter de albacea de la sucesión intestamentaria de la señora Lucrecia Valeriano a entregar a la señora Isabel Alvarado Sánchez, la posesión del predio urbano denominado El Paredón, ubicado en la población de Xochitlán, de esta jurisdicción y de las medidas y colindancias que obran en autos.- CUARTO.- Se concede a -- "la señora Guadalupe Barrientos de Luna, el término -- "de cinco días para la entrega de la posesión antes -- "mencionada.- QUINTO.- Se condena a la señora Guadalupe Barrientos por su representación al pago de los



- 3 -

5277/959
(30)
LC

"gastos y las costas legalmente causadas.- SEXTO.- Notifíquese...."

TERCERO.- Habiendo recurrido dicho fallo - la demandada, en apelación, el cinco de junio de mil-- novecientos cincuenta y nueve la Primera Sala del -- Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla -- dictó sentencia en la que resolvió: "PRIMERO.- Se re-- "voca la sentencia recurrida o sea la pronunciada - - "por el ciudadano Juez de lo Civil del Distrito Judi-- "cial de Zacapoaxtla, con fecha cinco de diciembre de "mil novecientos cincuenta y ocho en el juicio ordina-- "rio civil seguido por la señora Elisea Valeriano Al-- "varado, en representación de la señora Isabel Alva-- "rado Sánchez, en contra de la sucesión de la señora-- "Lucrecia Valeriano, representada por su albacea la - "señora Guadalupe Arrietas de Luna.- SEGUNDO.- Se - "absuelve a la citada sucesión, de la demanda que le-- "formuló la señora Isabel Alvarado Sánchez, en su -- "escrito de veintinueve de agosto de mil novecientos -- "cincuenta y ocho. Notifíquese....."

CUARTO.- Inconforme con la sentencia an-- terior la actora promovió este juicio de amparo, por-- conducto de la Sala responsable. Admitida la demanda el treinta y uno de agosto de mil novecientos cincuen-- ta y nueve, el Ministerio Público se abstuvo de in-- tervenir. El dieciséis de noviembre del mismo año se-- pasaron los autos al ponente. Existen actuaciones -- y promociones que interrumpen la caducidad, siendo - la última actuación del veintitrés del pasado julio.

C O N S I D E R A N D O :

PRIMERO.- El acto reclamado es cierto. Se comprueba su existencia con el informe de la respon-- sable y copia certificada de constancias remitida.

SEGUNDO.- La quejosa expresa en resumen - los siguientes conceptos de violación:

I).- Ante el Juez a quo declararon los -- tres testigos presentados por la actora el veintio-- cho de octubre de mil novecientos cincuenta y ocho - sobre su posesión de más de treinta años. La deman-- dada solo presentó escritura privada de compraventa-- de el predio El Paredón, extendida el veinte de ju-- lio de mil novecientos veintiocho a la señora Lucre-

cia Valeriano, autora de la sucesión. La posesión de la actora era de buena fe por fundarse en la información ad perpetuum relativa; y la demandada no presentó el antecedente de la citada escritura, o sea el título de propiedad en favor del señor Platón Valeriano, en el que además se hubiera hecho constar que la posesión se le entregaba. Por ello de autos se desprende que existe un período de posesión del predio por la actora, y al no haber justificado la propiedad la demandada se impone tener por probada la acción intentada.

II).- La responsable examina las pruebas de la demandada cuyo estudio omitió el inferior. -- Esas pruebas son la diligencia de aseguramiento de bienes del veintiséis de julio de mil novecientos cincuenta y dos decretado en los autos del intestado a bienes de la señora Lucrecia Valeriano, presentada en copia certificada, así como las copias también certificadas relativas a las resoluciones pronunciadas, respectivamente, en el incidente sobre exclusión de bienes promovido dentro de dicho juicio intestamentario, de veintiuno de febrero de mil novecientos cincuenta y tres, y de la sentencia ejecutoriada de primera instancia dictada en el interdicto de recuperar la posesión que promovió la sucesión de Lucrecia Valeriano en contra de la ahora quejosa Isabel Alvarado Sánchez, y la escritura de compraventa del veinte de julio de mil novecientos veintiocho celebrada entre el vendedor Platón Valeriano y su hermana Lucrecia.

a).- El aseguramiento de bienes no hace prueba porque a la diligencia no fueron citados ni la poseedora (la agraviada) ni los colindantes del inmueble, y no se fijaron sus límites, por lo cual el acta relativa no es documento público que haga prueba plena, máxime que la quejosa continuó en posesión del bien asegurado, aun cuando en dicha acta se haya asentado que se entregó al señor Fausto Tadeo, como interventor, lo que obligó a su contraria a promover el interdicto de recuperar la posesión.

b).- La resolución dictada en el inciden-



- 5 -

(30)
LC

te de exclusión de bienes, adversa a la quejosa y favorable a la sucesión demandada, tampoco hace prueba en su contra porque la absolución se apoyó en la consideración de falta de formalidades en la información ad perpetuam presentada por ella ⁷ documento demostrativo de su derecho sobre el inmueble, y sobre todo, porque las medidas y colindancias señaladas -- en la información eran diferentes de las consignadas en el acta de aseguramiento. Por lo tanto, la interlocutoria es un "documento público y con la autoridad de cosa juzgada, en tanto cuanto se refiera al predio perteneciente a la sucesión de Lucrecia Valeriano, pero no cuando pretenda relacionarse con un predio distinto al primero, en razón de sus medidas y colindancias: la cosa juzgada debe referirse a la misma materia de ⁸ controversia, y a este respecto, por razón de la diversidad de materia, dicha sentencia interlocutoria ni puede tener el carácter de documento público ni la autoridad de la cosa juzgada -- que se pretende atribuir por la responsable, por -- aplicación inexacta de las disposiciones normativas de la valoración de la prueba documental."

c).- En cuanto a la resolución pronunciada en el interdicto, la quejosa expone que aun cuando ésta haya causado estado, no impidió la promoción -- de un nuevo juicio de acuerdo con la doctrina, y el ⁹ texto del artículo 608 del código de procedimientos civiles del Estado, según el cual "el vencido en -- cualquier interdicto, puede hacer uso, después, del "juicio plenario de posesión o del de propiedad."

d).- Por último, respecto de la escritura privada de compraventa, aun cuando no haya sido objetada, prueba en contra de la agraviada en forma -- presuncional, pero admite prueba en contrario "y tal es el caso de que se trata: "solo prueba que la sucesión es la dueña pero no prueba que la posesión sea de ella, al tenor de las pruebas rendidas en el "juicio plenario de posesión", ni se trata de una -- controversia sobre propiedad; y, la objeción del documento privado no era necesaria. Al dársele valor probatorio pleno se violan las disposiciones legales invocadas.

Concluye la quejosa afirmando que no hay cosa juzgada, que en la diligencia de aseguramiento la entrega de la cosa fué virtual y no real, por lo que no es aplicable la presunción del artículo 842 del código civil del Estado, en el sentido de que se haya mantenido judicialmente a la sucesión en la posesión del bien, en virtud del aseguramiento, para tenerla como nunca perturbada; que la quejosa siguió poseyendo el inmueble, supuesto que tuvo necesidad la intestamentaria de promover interdicto para desalojarla, y que la resolución pronunciada en éste no excluyó el ejercicio de la acción planaria de posesión; que la señora Lucrecia Valeriano nunca poseyó el inmueble, y en cambio lo ha poseído la quejosa durante treinta años.

III).- Por lo que hace al tercer agravio de la apelante, y no obstante que no hay disposición legal que anule las informaciones, porque no se hayan dado los avisos al Tribunal Superior, máxime que consta que fué enviado a la Recaudación de Rentas como requisito para la inscripción en el Registro Público de la Propiedad, el Tribunal ad quem sostiene que la información ad perpetuum de la actora no acredita la buena fe de su posesión por las razones citadas, que son las mismas que adujo el Juez al decidir el incidente de exclusión de bienes; y que tampoco tiene validez la información, por haberse rendido ante Juez incompetente, según el artículo 50 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. La Sala incidió también en error, pues no concluyó que con la información se acreditaba la posesión respectiva, la buena fe y el justo título, al haberse rendido con anterioridad a la fecha en que se puso en posesión a la albacea, aplicando a contrario sensu la tesis del tomo XXXV-2398 del Semanario Judicial de la Federación. En ésta se establece esencialmente que si la información se rinde después de ponerse a la albacea en posesión de la cosa reclamada, en el interdicto de adquirir la posesión de bien hereditario, no es posible admitir aquélla para probar la prescripción por no llenar sus requisitos. Contra la errónea



apreciación judicial hecha en el incidente de exclusión resulta legítimo el criterio del a quo que concede valor a la información, al no estar declarada nula, ni su inscripción en el Registro. Las consideraciones del Juez son complementarias de las formuladas respecto del testimonio rendido por los señores Miguel Huerta, Julián Mora y Leandro Guzmán en el plenario de posesión. También es inexacta la estimación de la responsable porque la competencia de los Jueces Menores de lo Civil es para asuntos concuantía hasta de cien pesos, y de la boleta fiscal relativa consta que El Paredón, materia de la citada información solo tiene ese valor.

IV).- Con la indebida aplicación de las disposiciones legales por la responsable, que pretende enmendar el error del inferior para revocar su sentencia, deja de observar los artículos 812 a 815, 818, 820, 823 y relativos, del código civil fundamentales para el ejercicio de la acción plenaria de posesión, cuya existencia se probó en el juicio.

TERCERO.- Las consideraciones en que la Sala responsable funda la sentencia reclamada, son esencialmente las siguientes:

Se omite el estudio del primer agravio, porque su procedencia depende del resultado de los demás. En el único considerando de su sentencia el inferior expresa que no importa lo resuelto en el interdicto que de recuperar la posesión promovió la albacea demandada contra la actora, ni en el incidente de exclusión de bienes que a su vez la última siguió contra aquella, porque en los plenarios de posesión no se discute la propiedad como en los reivindicatorios. Por ello no estudió las pruebas de la demandada, y la Sala lo hace al corregir ese error. Con la copia derivada del expediente 32/52 del integrado de la señora Lucrecia Valoriano se comprobó que el veintiséis de julio de mil novecientos cincuenta y dos, judicialmente se aseguró el inmueble controvertido, y que después la actora promovió la exclusión del mismo del inventario de la sucesión demandada, que resultó infundada. De la copia relativa al interdicto de recuperar la posesión seguido

por la albacea contra la actora, aparece que se ordenó a ésta devolver a la sucesión la casa veintisiete de la calle de Ignacio Zaragoza de Kochitlán, y terreno anexo El Paredón, resolución que quedó firme por no haberse recurrido; y se ejecutó el once de agosto de mil novecientos cincuenta y ocho. Con la escritura privada de compraventa de El Paredón, del veinte de julio de mil novecientos veintiocho, se justificó que el señor Platón Valeriano lo vendió en cien pesos a la señora Lucrecia Valeriano en Tetela de Ocampo. Así se comprobó la excepción de cosa juzgada que alegó la albacea, sin que pueda modificarse esa situación, pues cuando la señora Alvarado Sánchez promovió la exclusión del inmueble se fundó en que lo poseyó por más de diez años, y lo prescribió, pero esto no lo justificó, y se iría contra el principio de la cosa juzgada si tratase de adquirir nuevamente aduciendo la misma posesión. Del interdicto y del juicio sucesorio se concluye que la autora de la sucesión poseía el inmueble, y si alguna vez perdió la posesión, por las diligencias de aseguramiento la recuperó, sin que el depositario señor Fausto Tadeo hubiese poseído ese bien a nombre de la señora Alvarado Sánchez; y que ésta última perdió la posesión respectiva al ejecutarse el fallo del interdicto. Por tanto, no siendo la posesión de la señora Alvarado Sánchez, en nada superior a la de la sucesión demandada, y no habiendo justificado aquella título alguno para poseer, se patentiza la improcedencia del citado juicio plenario, pues solo con el dicho de testigos pretende privar a la sucesión del referido bien, no obstante que ésta posee a título de dueña, según se estima presuntamente conforme al artículo 259 del código de procedimientos civiles, de la compraventa formalizada en documento privado entre el señor Platón Valeriano y la señora Lucrecia Valeriano, corroborado por las demás pruebas aludidas. La información ad perpetuum de la señora Isabel Alvarado para acreditar la posesión del predio referido, si bien es documento público según el artículo 185 fracción I del código de procedimientos civiles, no es título que acredite la buena fe de la posesión. Al resolverse el incidente de ex-



3

clusión de bienes del intestado, se advirtió por el Juez que no tenía valor, y sus razonamientos los estima fundados la Sala. Rendida la información el veintuno de noviembre de mil novecientos cincuenta y uno ante el Juez Menor de lo Civil de Xochitlán de Romero Rubio por la actora, declararon los señores Gabriel Gómez y Alejandrino Hernández que aquella poseyó el predio por más de diez años. Más como no se justificaron por otro medio la buena fe y el justo título para considerar probada la posesión adquisitiva de la propiedad, no se acreditó la prescripción correspondiente. Tampoco reúne la información los requisitos de los artículos 1158, 1159 y 1161 del código de procedimientos civiles, pues no se probaron las publicaciones correspondientes, ni de edictos, ni de avisos a la Reclamación y Tribunal Superior del Estado. Además como hizo notar la demandada en la audiencia de alegatos, los predios, el reclamado por la actora y el que según la escritura pertenece a la sucesión de la señora Valeriano, tienen distintas medidas y colindancias, habiéndose asegurado un bien de la sucesión y no el que la actora afirma haber adquirido por prescripción no se justificó la posesión exclusiva (en el incidente referido). Por otra parte, no tiene valor la información porque se rindió ante Juez incompetente, conforme a lo previsto en el artículo 50 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. No probada la acción debió absolverse a la demandada, y como no se hizo, se violó el artículo 288 citado en agravio, por lo que ha de decidirse la absolución procedente.

CUARTO.- El primero y tercero de los conceptos de violación alegados son infundados. La información ad perpetuum ofrecida por la actora como prueba de su posesión se rindió con fecha veintuno de noviembre de mil novecientos cincuenta y uno. La quejosa solo trajo al juicio de garantías una copia certificada de las sentencias pronunciadas en ambas instancias, de las notificaciones de la de segundo grado y de la solicitud de la copia certificada y acuerdo recaído. Consiguientemente, no se han desvirtuado con prueba fehaciente las afirmaciones de la autoridad --

responsable en el sentido de que se tramitó ante autoridad incompetente, y que no llenó los requisitos exigidos por los artículos 1158, 1159 y 1161 del código de procedimientos civiles, pues no se acreditó publicación por edictos, ni haber dado los avisos a la Recaudación de Rentas y al Tribunal Superior de Justicia del Estado (tesis jurisprudencial número 302 del último Apéndice del Semanario Judicial de la Federación).

Además, "la información ad perpetuum, que sólo se decreta cuando se trata de acreditar algún hecho o justificar un derecho, en los que no tenga interés más que la persona que la solicita, no puede surtir efectos definitivos contra tercero, ni puede ser estimada en juicio contradictorio, como una información testimonial ofrecida y rendida con arreglo a la ley, puesto que la misma ordena que esa clase de pruebas se rindan siempre con citación contraria, entregando una copia del interrogatorio a la contraparte, para que ejercite el derecho de repreguntar a los testigos" (tesis jurisprudencial número 565 del Apéndice invocado).

El segundo concepto de violación es fundado en parte, e inoperante e infundado en otra. Es cierta la violación al artículo 608 del código de procedimientos civiles aplicable, porque en la especie las resoluciones pronunciadas en el incidente de exclusión de bienes de que se trata, y en el interdicto de recuperar la posesión, no producen los efectos de la cosa juzgada. El intestado a bienes de la señora Lucrecia Valeriano es un juicio universal de jurisdicción mixta, en que ni la declaratoria de herederos ni resolución alguna pronunciada en el curso de su tramitación, establece la inmutabilidad de los derechos discutidos ni la irrevocabilidad y firmeza mediante el ejercicio de la acción en juicio ordinario. Del mismo modo que en cuanto a los interdictos, su resolución es provisional y no definitiva, de manera que quedan a salvo los derechos de las partes contendientes para deducirlos en la vía ordinaria. Lo disponen así los artículos 3498 del código civil, y el 608 del de procedimientos civiles.

Consiguientemente, la autoridad respon-



sable incurrió en las violaciones señaladas por la --
quejosa, al considerar demostrada la excepción de co-
sa juzgada. Sin embargo, el concepto de violación que-
se estudia resulta inoperante porque esta sola consi-
deración no influye en el resultado final del negocio,
toda vez que el mismo concepto de violación que se --
examina es infundado en cuanto a la apreciación que --
hizo la autoridad responsable del valor probatorio --
de la escritura privada de compraventa del veinte de-
julio de mil novecientos veintiocho, por lo al no ser
objugada esa escritura hace prueba plena conforme al
artículo 256 del código de procedimientos civiles, y
porque no es cierto que en el juicio se hayan rendido
pruebas demostrativas del mejor derecho de la quejosa
a poseer el inmueble en disputa. C

En efecto, la actora solo rindió como --
pruebas de su parte la información ad perpetuum y una-
prueba testimonial. Respecto a la primera procede de-
cir que fué legalmente desestimada por las considera-
ciones precedentes, y en cuanto a la segunda se igno-
ra lo que declararon los testigos, por no haber alle-
gado pruebas la quejosa al juicio constitucional, por
lo que tiene aplicación la tesis jurisprudencial núme-
ro 302 ya citada, también en relación a este punto.

Por lo demás, de las copias certificadas
de las sentencias dictadas en ambas instancias no apa-
rece que se haya demostrado el matrimonio religioso --
ni el matrimonio civil de la quejosa, con el vendedor
señor Platón --, y si la sucesión demandada --
acreditó en cambio con la escritura respectiva no ob-
jetada el dominio sobre El Paradón, el derecho de ésta
a la posesión del bien resulta demostrado, sobre todo
si a esta prueba se agregan las presunciones que re-
sultan de las resoluciones desfavorables a la agravi-
da dictadas en beneficio de la tercero perjudicada, --
tanto en el incidente de exclusión de bienes cuanto --
en el interdicto de recuperar la posesión de que se --
ha hablado. Es cierto que en el juicio plenario se --
discute la posesión, y no la propiedad, y aun cuando
efectivamente la acción reivindicatoria y la publicia-
na son distintas, a pesar de tener muchos puntos en --
común, legalmente no puede postergarse a quien tiene-

derecho para poseer porque es el dueño de la cosa, --
frente a quien en todo caso tiene de ella solo una --
posesión derivada.

Por tanto, la sentencia reclamada está
ajustada a la ley, y no siendo violatoria de las ga-
rantías de los artículos 14 y 16 constitucionales, --
debe negarse a la quejosa el amparo solicitado.

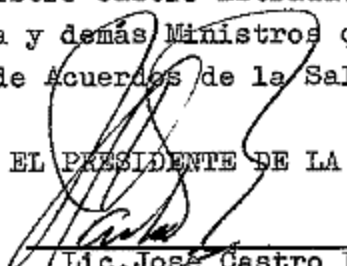
Por lo expuesto, fundado, y con apoyo s-
más en los artículos 103 fracción I y 107 fracciones
I, II y V de la Constitución Federal, 45, 76, 79, 1-
185, 186, 190 de la Ley de Amparo y 26 fracción III
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federa-
ción, se resuelve:

UNICO.- La Justicia de la Unión no ampa-
ni protege a la señora Isabel Alvarado Sánchez contra
la sentencia dictada el cinco de junio de mil novecie-
tos cincuenta y nueve por la Primera Sala del Tribunal
Superior de Justicia del Estado de Puebla, en la apor-
ción relativa al juicio ordinario civil seguido por
la quejosa a la sucesión de la señora Eucrecia Vale-
riano, ante el Juez de lo Civil del Distrito Judicial
de Zacapoaxtla, de la citada Entidad.


Notifíquese; remítase testimonio de la
presente resolución a la autoridad señalada como res-
ponsable y, en su oportunidad, archívese el expedien-
te.

Así por unanimidad de cinco votos de los
señores Ministros Mariano Ramírez Vázquez, Alberto R.
Vela, José López Lira, Gabriel García Rojas y Presi-
dente José Castro Estrada lo resolvió la Tercera Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fué re-
lator de este asunto el Ministro Castro Estrada. Fir-
man el Presidente de la Sala y demás Ministros que la-
integran con el Secretario de Acuerdos de la Sala que
autoriza.

EL PRESIDENTE DE LA SALA:


Lic. José Castro Estrada.

MINISTROS:


Lic. Mariano Ramírez Vázquez.



5277/959
(30)
LC

Quejosa: Isabel Alvarado --
Sánchez.

Lic. Alberto A. Vela.

Lic. José López Lira.

Lic. Gabriel García Rojas.

EL SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA SALA:

Lic. Angel Morales Moreno.

Se hace constar que esta hoja corresponde a la sentencia pronunciada en el amparo directo número 5277/959 promovido por Isabel Alvarado Sánchez.

"En 1^a de 1980 por lista de la misma fecha, se notificó la resolución anterior a los interesados al Ministerio Público Federal,

